

INE/CG82/2023

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021
DENUNCIANTES: MARÍA ANTONIA CADENA
HERNÁNDEZ Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR VEINTIDÓS PERSONAS, OTRORA ASPIRANTES AL CARGO DE CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL DERECHO POLÍTICO DE LIBRE AFILIACIÓN, Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés.

G L O S A R I O	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
INE	Instituto Nacional Electoral

G L O S A R I O	
LGPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
PT	Partido del Trabajo
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva

R E S U L T A N D O

1. Denuncias. En la fecha que en cada caso se precisa, se recibieron en la *UTCE*, **veintidós** escritos de queja, signados por igual número de personas, mediante los cuales, cada una de ellas, hicieron del conocimiento de esta autoridad, haber sido incorporadas al padrón del *PT* sin haber otorgado consentimiento para ello.

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
1	María Antonia Cadena Hernández	08/12/2020 ¹
2	Norma Mirella Corrales Félix	14/12/2020 ²
3	Elizabeth Torres Deloya	14/12/2020 ³
4	Liliana Flores Saldaña	09/12/2020 ⁴
5	Edgar Fernando Roa Rodríguez	09/12/2020 ⁵
6	María Elena del Refugio Martínez Flores	08/12/2020 ⁶

¹ Visible a página 3. Salvo precisión en contrario, la referencia corresponde a las constancias del expediente que se resuelve.

² Visible a página 10.

³ Visible a página 17.

⁴ Visible a página 28.

⁵ Visible a página 35.

⁶ Visible a página 43.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
7	Leticia Aguilar Campos	08/12/2020 ⁷
8	Gerardo Nieto Tovar	08/12/2020 ⁸
9	Luis Fernando López Estrada	08/12/2020 ⁹
10	Verónica Cabrera Hernández	08/12/2020 ¹⁰
11	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez	08/12/2020 ¹¹
12	Luis Alfonso Arano Ponce	08/12/2020 ¹²
13	Roger Ordaz de la Peña	08/12/2020 ¹³
14	Anadela Cano Vázquez	08/12/2020 ¹⁴
15	César Estrada Pérez	08/12/2020 ¹⁵
16	María de la Luz Fabro Fuentes	08/12/2020 ¹⁶
17	Jaime Alvarado Zapata	10/12/2020 ¹⁷
18	Nallely Rubí de León Montellano	10/12/2020 ¹⁸
19	Luis Arturo Hernández Melgoza	09/12/2020 ¹⁹
20	Emilio Iván Vargas Lomelí	09/12/2020 ²⁰
21	Héctor Méndez Oseguera	09/12/2020 ²¹
22	Lucía Araceli Ramírez González	09/12/2020 ²²

2. Registro, recepción de escritos de queja, admisión, reserva de emplazamiento y diligencias de investigación. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno²³, emitido por el Titular de la *UTCE*, se tuvieron por recibidas las quejas, quedando registradas como un solo **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**.

⁷ Visible a página 49.

⁸ Visible a página 54.

⁹ Visible a página 59.

¹⁰ Visible a página 64.

¹¹ Visible a página 75.

¹² Visible a página 84.

¹³ Visible a página 92.

¹⁴ Visible a página 100.

¹⁵ Visible a páginas 107 a 108.

¹⁶ Visible a página 114.

¹⁷ Visible a página 123.

¹⁸ Visible a página 129.

¹⁹ Visible a página 137.

²⁰ Visible a página 141.

²¹ Visible a página 145.

²² Visible a página 150.

²³ Visible a páginas 155 a 164.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

Asimismo, se admitieron a trámite dichas denuncias y se reservó lo conducente respecto al emplazamiento de las partes, hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

Finalmente, con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de mayores elementos y constancias necesarias para la debida sustanciación del procedimiento, en dicho proveído, también se ordenó requerir al *PT* así como a la *DEPPP*, información relacionada con la presunta afiliación de las personas quejasas a dicho partido político.

Las diligencias se llevaron a cabo en los términos que se detallan a continuación:

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta
<i>PT</i>	INE-UT/00634/2021²⁴ 29 de enero de 2021	Oficio REP-PT-INE-PVG-073/2021²⁵; REP-PT-INE-PVG-092/2021²⁶ y REP-PT-INE-PVG-543/2021²⁷(alcance, en este se aportaron constancias de afiliación) 05 y 19 de febrero, así como 13 de julio, todos de 2021, respectivamente.
<i>DEPPP</i>	INE-UT/00635/2021²⁸ 02 de febrero de 2021	Correo electrónico institucional²⁹ 09 de febrero de 2021

3. Requerimiento a *DEPPP* y vista con constancias. En acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno,³⁰ se ordenó requerir a la *DEPPP* a efecto de que confirmara que los datos proporcionados en su respuesta, por cuanto hace a Liliana Flores Saldaña en relación con la entidad de residencia fueran correctos y que se trataba de la misma persona quejosa, ya que no coincide con la entidad donde se ubica el domicilio de esa persona denunciante.

La anterior diligencia se llevó a acabo de acuerdo con lo siguiente:

²⁴ Visible a página 176.

²⁵ Visible a página 187 a 190. Anexos en páginas 191 a 220.

²⁶ Visible a páginas 254 a 255. Anexos en páginas 256 a 259.

²⁷ Visible a páginas 354 a 355. Anexos en páginas 356 a 358.

²⁸ Visible a página 179

²⁹ Visible a páginas 221 a 223.

³⁰ Visible a páginas 324 a 330.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta
DEPPP	INE-UT/02776/2021³¹ 07 de abril de 2021	Correo electrónico institucional³² 07 de abril de 2021

Asimismo, se instruyó dar vista a la Jaime Alvarado Zapata, con copia simple de la cédula de afiliación aportada por el *PT*, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

No.	Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Jaime Alvarado Zapata INE-JDE04-ZAC/0416/2021 ³³	12 de abril de 2021 ³⁴ Del 13 al 15 de abril de 2021	No

4. Inspección. En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno,³⁵ se ordenó realizar inspección al portal de internet del *PT*, a efecto de verificar si el registro de las personas denunciantes como militantes de ese partido político había sido cancelado; el resultado de la diligencia se hizo constar en Acta Circunstanciada,³⁶ en la que se asentó que las personas denunciantes habían dejado de aparecer en dicho sitio web.

5. Vista. En acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno,³⁷ se instruyó dar vista a Leticia Aguilar Campos, con copia simple de la cédula de afiliación aportada por el *PT*, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

No.	Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Leticia Aguilar Campos Estrados	12 de octubre de 2021 ³⁸ Plazo: 13 al 15 de octubre de 2021	No

6. Prevención. Toda vez que María Antonia Cadena Hernández, escribió “*no es mi deseo continuar el procedimiento y no quiero seguir siendo notificada*”³⁹ en el oficio

31 Visible a página 335

32 Visible a páginas 337 a 338.

33 Visible a página 341.

34 Visible a página 340.

35 Visible a páginas 343 a 347.

36 Visible a páginas 347 a 351.

37 Visible a páginas 359 a 363.

38 Visible a páginas 383 a 385.

39 Visible a página 311.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

con el cual personal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Tlaxcala, le notificó el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

En ese sentido, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós⁴⁰, se ordenó dar vista a dicha persona denunciante, a efecto que, ratificara su intención de desistirse, y en su caso, realizara las manifestaciones que a sus intereses convinieran, apercibiéndosele que, la omisión de dar contestación a la vista formulada, tendría como efecto la ratificación del desistimiento.

El acuerdo de vista se diligenció en los términos siguientes:

No.	Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	María Antonia Cadena Hernández JDE01/0163/2022 ⁴¹	Cédula: 03 de marzo de 2022 ⁴² Plazo: 04 al 08 de marzo de 2022	Sin respuesta

7. Emplazamiento. El dos de mayo de dos mil veintidós⁴³ la *UTCE* ordenó el emplazamiento al *PT*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Para tal efecto, se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los términos siguientes:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PT</i> INE-UT/04168/2022 ⁴⁴	Citatorio: 04 de mayo de 2022 ⁴⁵ Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁴⁶ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022.	Sin respuesta

8. Presentación extemporánea de cédulas de afiliación. Mediante oficios REP-PT-INE-SGU-207/2022⁴⁷, recibido en la *UTCE* el dos de junio de dos mil veintidós,

40 Visible a páginas 390 a 394.

41 Visible a página 399.

42 Visible a página 400.

43 Visible a páginas 404 a 416.

44 Visible a página 422.

45 Visible a página 43 a 424.

46 Visible a página 425.

47 Visible a página 434. Anexos en páginas 435 a 438

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

el *PT* presentó formatos de afiliación originales de Emilio Iván Vargas Lomelí, Héctor Méndez Oseguera, César Estrada Pérez.

9. Alegatos. El quince de junio de dos mil veintidós⁴⁸ se ordenó poner las actuaciones a disposición de las partes a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para formular alegatos se diligenció en los términos siguientes:

Denunciado:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PT</i> INE-UT/05712/2022 ⁴⁹ 16 de junio de 2022	Citatorio: 16 de junio de 2022 Cédula: 17 de junio de 2022 Plazo: 20 al 24 de junio de 2022.	Oficio REP-PT-INE-SGU-229-2022⁵⁰ 21 de junio de 2022

Denunciantes:

Al respecto, es de referir que las personas quejasas, no obstante ser debidamente notificadas, fueron omisas en pronunciar alegatos:

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Norma Mirella Corrales Félix INE/SIN-JDE/VS/684/2022 ⁵¹	Cédula: 21 de junio de 2022 Plazo: 22 al 28 de junio de 2022.	Sin respuesta
2	Elizabeth Torres Deloya INE/JDE-02/VS/0440/2022 ⁵²	Cédula: 22 de junio de 2022 Plazo: 23 al 29 de junio de 2022.	Sin respuesta
3	Liliana Flores Saldaña INE/NAY/JDE03/VS/0977/2022 ⁵³	Cédula: 21 de junio de 2022 Plazo: 22 al 28 de junio de 2022.	Sin respuesta
4	Edgar Fernando Roa Rodríguez INE/MICH/JDE05/VS/197/2022 ⁵⁴	Cédula: 20 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022.	Sin respuesta

48 Visible a página 439 a 444.

49 Visible a página 458.

50 Visible a página 466.

51 Visible a página 501 a 502.

52 Visible a página 642.

53 Visible a página 488.

54 Visible a página 512.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
5	María Elena del Refugio Martínez Flores INE/GTO/JDE07/VS/187/2022 ⁵⁵	Cédula: 17 de junio de 2022 Plazo: 20 al 24 de junio de 2022.	Sin respuesta
6	Leticia Aguilar Campos INE/SLP/06JDE/VS/232/2022 ⁵⁶	Citatorio: 21 de junio de 2022 Cédula: 22 de junio de 2022 Plazo: 23 al 29 de junio de 2022.	Sin respuesta
7	Gerardo Nieto Tovar INE/SLP/06JDE/VS/233/2022 ⁵⁷	Cédula por comparecencia: 21 de junio de 2022 Plazo: 22 al 28 de junio de 2022.	Sin respuesta
8	Luis Fernando López Estrada INE/SLP/06JDE/VS/232/2022 ⁵⁸	Por estrados: 22 de junio de 2022 Plazo: 23 al 29 de junio de 2022.	Sin respuesta
9	Verónica Cabrera Hernández INE/VS/JDE03/NL/0416/2022 ⁵⁹	Citatorio: 21 de junio de 2022 Cédula: 22 de junio de 2022 Plazo: 23 al 29 de junio de 2022.	Sin respuesta
10	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez Sin oficio	Por estrados: 20 de junio de 2022 Plazo: 20 al 24 de junio de 2022.	Sin respuesta
11	Luis Alfonso Arano Ponce Sin oficio	Por estrados: 20 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022.	Sin respuesta
12	Roger Ordaz de la Peña INE-QROO/04JDE/VS/0308/2022 ⁶⁰	Cédula: 17 de junio de 2022 Plazo: 20 al 24 de junio de 2022.	Sin respuesta
13	Anadela Cano Vázquez INE/JD06-VER/1367/2022 ⁶¹	Cédula: 21 de junio de 2022 Plazo: 22 al 28 de junio de 2022.	Sin respuesta
14	César Estrada Pérez INE/MICH/JDE04-VS/287/2022 ⁶²	Cédula: 27 de junio de 2022 Plazo: 28 de junio al 04 de julio de 2022.	Sin respuesta

55 Visible a página 468.

56 Visible a página 585.

57 Visible a página 613.

58 Visible a página 603.

59 Visible a página 531.

60 Visible a página 546.

61 Visible a página 496.

62 Visible a página 615.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
15	María de la Luz Fabro Fuentes INE-QROO/04JDE/VS/0309/2022 ⁶³	Cédula: 17 de junio de 2022 Plazo: 20 al 24 de junio de 2022.	Sin respuesta
16	Nallely Rubí de León Montellano INE-JDE03-ZAC/0777/2022 ⁶⁴	Cédula: 24 de junio de 2022 Plazo: 27 de junio al 01 de julio de 2022.	Sin respuesta
17	Luis Arturo Hernández Melgoza INE/MICH/JDE05/VS/199/2022 ⁶⁵	Cédula: 20 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022.	Sin respuesta
18	Emilio Iván Vargas Lomelí INE/MICH/JDE05/VS/199/2022 ⁶⁶	Citatorio: 20 de junio de 2022 Cédula: 21 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022.	Sin respuesta
19	Héctor Méndez Oseguera INE/MICH/JDE05/VS/200/2022 ⁶⁷	Cédula: 20 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022.	Sin respuesta
20	Lucía Araceli Ramírez González INE/MICH/JDE05/VS/201/2022 ⁶⁸	Cédula: 20 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022.	Sin respuesta

10. Reposición de notificación de alegatos y vista a una persona denunciante. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó reponer la notificación de la vista de alegatos respecto del ciudadano Jaime Alvarado Zapata.

Diligencia que se realizó de acuerdo con lo siguiente:

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Jaime Alvarado Zapata INE/JDE04-ZAC/VS/1182/2022 ⁶⁹	Cédula: 16 de noviembre de 2022 Plazo: 17 al 23 de noviembre de 2022.	Sin respuesta

63 Visible a página 541.

64 Visible a página 524.

65 Visible a página 519.

66 Visible a página 519.

67 Visible a página 515.

68 Visible a página 509.

69 Visible a página 679.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

Asimismo, se ordenó dar vista a la ciudadana Verónica Cabrera Hernández con la cédula de afiliación original aportada por el *PT*, así como reponer la vista de alegatos respecto al partido político denunciado y la ciudadana señalada.

Lo cual se diligenció como se detalla enseguida:

Denunciado:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PT</i> INE-UT/09329/2022 ⁷⁰	Citatorio: 14 de noviembre de 2022 Cédula: 15 de noviembre de 2022 Plazo: 16 al 22 de noviembre de 2022	Oficio REP-PT-INE-SGU-341-2022⁷¹ 18 de noviembre de 2022

Denunciante:

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Verónica Cabrera Hernández INE/VS/JDE03/NL/0952/2022 ⁷²	Cédula: 14 de noviembre de 2022 Plazo: 15 al 21 de noviembre de 2022.	Sin respuesta

11.Verificación final de no reafiliación. Mediante inspección realizada por personal de esta Unidad Técnica al *Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos*, se corroboró que las personas denunciadas habían sido dadas de baja del padrón de militantes del *PT*, sin advertir alguna nueva afiliación.

12. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión de Quejas*.

13. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. En la Sexta Sesión Extraordinaria Urgente de carácter Privado,

70 Visible a página 662

71 Visible a páginas 670 a 674.

72 Visible a página 676.

celebrada el quince de febrero de dos mil veintitrés, el citado órgano colegiado analizó y aprobó el presente proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*, respecto de las conductas que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos obligados a la misma.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PT*, en perjuicio de las personas que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23, del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PT*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales por parte de ese instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁷³ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

⁷³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA QUEJA PRESENTADAS POR MARÍA ANTONIA CADENA HERNÁNDEZ

Por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 466, párrafo 3, de la *LGIPE*, en relación con el artículo 30, numeral 1 del *Reglamento de Quejas*, debe verificarse si se actualiza alguna causal de sobreseimiento de las previstas en dicha normatividad, pues de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Por lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 465, párrafo 8, inciso c), de la *LGIPE*, en relación con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 1, inciso c), del *Reglamento de Quejas*, esta autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento contempladas en la normativa electoral.

En principio, se debe asentar que el sobreseimiento, en términos de lo previsto en el artículo 466, párrafo 2, inciso a), de la *LGIPE* se actualiza cuando *habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia*.

Esto es, se da como efecto inmediato, al actualizarse una causal de improcedencia, antes de que se dicte resolución o sentencia, y una vez admitida la queja o denuncia.

En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento por desistimiento, prevista en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE* y 46, párrafo 3, fracción III del *Reglamento de Quejas* que, en lo que interesa, a la letra establecen:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 466.

...

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los Principios rectores de la función electoral.

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Artículo 46.

...

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Lo anterior, tomando en consideración que obra en autos la manifestación por escrito de María Antonia Cadena Hernández, por medio del cual **se desistió de la queja que presentó en contra del PT** y que, además, se estima que los hechos denunciados no revisten gravedad, ni tampoco con su comisión pueden verse afectados los principios rectores de la función comicial.

El contenido del escrito en cuestión es el siguiente:

Persona denunciante	Contenido del escrito de desistimiento
María Antonia Cadena Hernández	“Recibí copia del acuerdo y oficio 3/02/2021 María Antonia Cadena Hernández. No es mi deseo continuar con el procedimiento y no quiero seguir siendo notificada.”

En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Titular de la *UTCE*, tuvo por recibido el escrito de desistimiento signado por la citada persona quejosa; además, debe señalarse que, a efecto de agotar la tramitación establecida para tales casos, en dicho proveído se ordenó dar vista a esa persona denunciante, a efecto que, en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la legal notificación de ese proveído, ratificara el mismo o, en su caso, realizara las manifestaciones que a sus intereses convinieran, apercibiéndosele que, la omisión de dar contestación a la vista formulada, tendría como efecto la ratificación del desistimiento.

Para tal propósito, sirvió de apoyo como criterio orientador, la Tesis **I.5o.A.22 A**, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

*“DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE ORDENAR SU RATIFICACIÓN.⁷⁴ El artículo 230, párrafo final, del Código Fiscal de la Federación establece que el Magistrado instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier diligencia, lo que revela la facultad a aquél conferida para ordenar, sin limitación alguna, la práctica de cualquier diligencia con relación a los hechos controvertidos; luego, **en aras de la observancia a las formalidades esenciales del procedimiento debe ordenar la ratificación del escrito de desistimiento del juicio, aun cuando en las leyes aplicables al caso no se prevea disposición alguna en ese sentido.** Lo anterior porque ese vacío de la ley no debe llevar a la autoridad a tener al actor por desistido del juicio, dado que tratándose de la renuncia de un derecho es necesario requerir al autor el escrito en donde se manifiesta esa voluntad, para que ante la presencia del Magistrado instructor reconozca su contenido y firma, y así tener la certeza de que emanó de la persona a quien asiste el derecho.”*

El referido acuerdo fue notificado a **María Antonia Cadena Hernández**; no obstante, la persona denunciante fue omisa en dar contestación a la vista pero, de conformidad con la prevención decretada en el acuerdo emitido por la autoridad instructora, se le tuvo por desistida de la denuncia.

En consecuencia, toda vez que el derecho a la libertad de afiliación, es un derecho personalísimo, al ser decisión de las y los ciudadanos el afiliarse o no a determinada fuerza política, conforme lo prevé tanto la *Constitución* como la normativa de la materia, que los hechos denunciados no revisten gravedad ni tampoco con su realización pueden verse afectados los principios rectores de la función comicial y que la personas denunciante, de manera expresa y tácita, manifestó su deseo de desistirse de la acción instaurada en contra del *PT*, lo procedente **es sobreseer** el presente asunto respecto de la queja presentada por **María Antonia Cadena Hernández**, no obstante que ya había sido admitida a trámite la denuncia presentada por la quejosa citada.

Lo anterior, atendiendo a que el desistimiento constituye un acto procesal, mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no continuar con la secuela del procedimiento administrativo con motivo del ejercicio de una acción, con la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite

74 Época: Novena Época, Registro: 179051, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.5o.A.22 A, Página: 1110.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

Por tanto, esta autoridad nacional estima procedente **sobreseer** el presente asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIFE*, y 46, párrafo 3, fracción III, del *Reglamento de Quejas*, únicamente, por lo que hace a los hechos denunciados por **María Antonia Cadena Hernández**.

A similar conclusión arribó este Consejo General al emitir, entre otras, la resolución **INE/CG1673/2018**, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, que resolvió el procedimiento administrativo sancionador **UT/SCG/Q/JAD/JD13/JAL/144/2020** y su acumulado **UT/SCG/Q/NMM/CG/210/2021**.

TERCERO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que, respecto de las personas denunciadas de quienes habrá de emitirse pronunciamiento de fondo, se tiene que, en **dos casos**, las presuntas faltas (violación al derecho de libre afiliación) se cometieron durante la vigencia del *COFIPE*, puesto que el registro o afiliación de dichas personas al *PT* se realizó antes de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho *Código*.

No.	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación
1	Norma Mirella Corrales Félix	30/06/2008
2	Elizabeth Torres Deloya	21/02/2011
3	Liliana Flores Saldaña	15/04/2008
4	María Elena del Refugio Martínez Flores	12/06/2012
5	Leticia Aguilar Campos	19/09/2011
6	Gerardo Nieto Tovar	20/11/2012
7	Luis Fernando López Estrada	11/05/2009
8	Verónica Cabrera Hernández	23/12/2013
9	Anadela Cano Vázquez	23/12/2011
10	César Estrada Pérez	15/10/2011
11	Jaime Alvarado Zapata	10/10/2013
12	Nallely Rubí de León Montellano	14/11/2013
13	Emilio Iván Vargas Lomelí	11/01/2014
14	Héctor Méndez Oseguera	22/05/2012

Por tanto, en los casos antes precisados, debe establecerse que, si al momento de la comisión de las presuntas faltas se encontraba vigente el *COFIPE*,⁷⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en los casos que así corresponda, al margen que las faltas pudieran

⁷⁵ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIFE*.

Por otro lado, para los supuestos que a continuación se citan, la legislación comicial aplicable para la resolución del presente asunto será la *LGIFE*; lo anterior, toda vez que las afiliaciones de estas personas ocurrieron una vez que entró en vigor dicho ordenamiento legal.

No.	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación
1	Edgar Fernando Roa Rodríguez	12/11/2019
2	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez	12/03/2020
3	Luis Alfonso Arano Ponce	02/12/2019
4	Roger Ordaz de la Peña	12/12/2019
5	María de la Luz Fabro Fuentes	08/12/2019
6	Luis Arturo Hernández Melgoza	15/11/2019
7	Lucía Araceli Ramírez González	11/12/2019

Finalmente, será la *LGIFE* y el *Reglamento de Quejas*, la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

CUARTO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019

Para efectos de la resolución del asunto que nos ocupa y, con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que, se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo, fueron las siguientes:

- 1) La imposición de sanciones económicas que se aplicaban a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.

2) Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

3) La revisión que el *INE* realizó a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.

4) Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que, de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontraran en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuya inobservancia tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados/as son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este Consejo General al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en sus archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

1. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

En el presente asunto se debe determinar si el **PT conculcó el derecho de la libre afiliación**, en su **vertiente positiva —indebida afiliación—** de las **veintiún personas**⁷⁶ que alegan no haber dado su consentimiento para pertenecer a sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41 Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) [dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil veinte, ahora aparecen como incisos a), e), q), x) e y)], del artículo 25, párrafo 1, de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los siguientes Principios y bases: ...

*II. La información que se refiere a la vida *PT*vada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

⁷⁶ Toda vez que, de las veintidós personas que denunciaron haber sido afiliadas indebidamente, una se desistió.

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los Principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, Principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9 constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las PTmeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a las personas que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002** emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**⁷⁷

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁷⁸ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de las y los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada uno de ellos, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de las y los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos

77 Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

78 Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de las personas para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que las personas afiliadas a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporadas al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de Principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos **y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.

- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa de lo o el ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio a la o al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de estos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad de la persona de ser afiliada al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que las y los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por la persona, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PT

Como se ha mencionado, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba; por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PT*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:⁷⁹

[...]

Estatutos del PT
**CAPÍTULO IV. DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES.
DE LOS MILITANTES.**

Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. *Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el Artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.*

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO.

Artículo 22. Los requisitos de ingreso de los afiliados al Partido del Trabajo son:

⁷⁹ Consultable en la dirección electrónica: <https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/documentos-basicos/>.

(...)

d) **Presentar una solicitud de afiliación por escrito**, a la instancia partidaria correspondiente.

e) **Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria** ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso.

f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.

g) *En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.*

[Énfasis añadido]

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave *INE/CG33/2019*, por el cual se aprobó *la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales*, ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado, el cual en lo que interesa estableció:

Acuerdo INE/CG33/2019

“C O N S I D E R A N D O

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, se estima

necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

...

12. Procedimiento de revisión y actualización y modernización de los Padrones de afiliadas y afiliados.

...

4. Consolidación de padrones.

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

A partir del sexto día hábil del mes de enero de dos mil veinte y hasta el último día de ese mes, los PPN notificarán a la DEPPP respecto de la cancelación de datos en el sistema de cómputo de todos aquellos registros que permanecieron en el estatus de reserva y de los cuales no informaron, ni acreditaron poseer el documento que prueba la afiliación o ratificación de la misma. En caso contrario, el último día de enero de dos mil veinte, la DEPPP requerirá a los PPN para que informen del estatus señalado, apercibiendo a los PPN que, de ser omisos en la respuesta, sabedores de las consecuencias.

...

ACUERDO

PRIMERO. *Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.*

SEGUNDO. *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

TERCERO. *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

CUARTO. *Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.*

QUINTO. *Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.*

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Conclusiones

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho político electoral de formar partidos políticos y **afiliarse libre e individualmente a ellos.**
- Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales **se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.**

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

- Los partidos políticos **deben** resguardar con el debido cuidado, la documentación en la que conste que cada uno de sus afiliados, concedió su consentimiento para ser incorporado a su padrón de afiliados.
- Podrán afiliarse al *PT* los ciudadanos mexicanos **que acudan** a los órganos partidarios competentes para realizar la afiliación.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.
- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrada como militante del *PT*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrada en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PT*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la o el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad,

incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue derivado de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**⁸⁰, en el que estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁸¹ el cual tiene distintas

⁸⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁸¹. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, *Tribunal Electoral*, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁸² y como estándar probatorio.⁸³

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁸⁴ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando **las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por la denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

⁸² Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁸³ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁸⁴ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.**

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIFE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la **constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que una persona desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la o del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo una persona previa a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de la persona quejosa, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIFE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**⁸⁵ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.**

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

⁸⁵ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**⁸⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**⁸⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁸⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**⁸⁹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**⁹⁰
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**⁹¹

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,⁹² dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del*

⁸⁶ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

⁸⁷ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

⁸⁸ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

⁸⁹ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

⁹⁰ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

⁹¹ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

⁹² Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

*instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,⁹³ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitante; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica,

⁹³ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normativa que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias respecto de las que se emitirá la presente determinación (veintiún personas en total, como se ha establecido previamente), versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación—, ya que denunciaron haber sido incorporadas en el padrón del *PT*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar y continuar con tales afiliaciones.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de la denuncia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

- I. **Afiliaciones que, a juicio de esta autoridad, se realizaron conforme con la normativa aplicable.**

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	<p>Leticia Aguilar Campos</p> <p>Denunció al <i>PT</i>, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que no se afilió a ningún partido político.</p>	<p>Afiliada 19/09/2011</p> <p>Registro cancelado 04/02/2021</p>	<p>Informó que fue afiliada el 19/09/2011 y que fue dada de baja el 29/01/2021.</p> <p>Aportó el original del formato de afiliación en el que aparecen además de los datos de la persona denunciante, firma; fecha en el apartado “miembro desde”, que corresponde al año 2011, el cual coincide con el año que informó la <i>DEPPP</i> y el propio partido.</p>
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecido previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PT</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
2	<p>Verónica Cabrera Hernández</p> <p>Denunció al <i>PT</i>, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación, pero que hace un tiempo presto su casa para que maestras del CENDI dieran clases y que le pidieron comprobantes de domicilio, acta de nacimiento y copia de credencial de elector para que niños inscritos recibieran alimentos.</p>	<p>Afiliada 23/12/2013</p> <p>Registro cancelado 07/12/2020</p>	<p>Informó que fue afiliada en 2013 y que fue dada de baja.</p> <p>Aportó el original del formato de afiliación en el que aparecen además de los datos de la persona denunciante, firma; fecha en el apartado “miembro desde”, que corresponde a la informada por la <i>DEPPP</i> y el propio partido.</p>
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecido previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PT</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
3	<p>Jaime Alvarado Zapata</p> <p>Denunció al <i>PT</i> por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que hicieron uso de sus datos en una reunión que asistió donde le pidieron su credencial para votar.</p>	<p>Afiliado 10/10/2013</p> <p>Registro cancelado 04/02/2021</p>	<p>Informó que fue afiliado el 10/10/2013 y que fue dada de baja el 29/01/2021.</p> <p>Aportó el original del formato de afiliación en el que aparecen además de los datos de la persona denunciante, firma; fecha en el apartado "miembro desde 2012".</p>
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecido previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

II. Afiliaciones respecto de las que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de los ciudadanos.

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
1	<p>Norma Mirella Corrales Félix</p> <p>Refirió que desconocía su afiliación al <i>PT</i>, que nunca dio su consentimiento y que nunca fue su voluntad estar inscrita en ese partido político.</p>	<p>Afiliada 30/06/2008</p> <p>Registro cancelado 29/01/2021</p>	<p>Informó que fue afiliada el 21/12/2007 y que fue dada de baja el 29/01/2021.</p> <p>No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.</p>
Conclusiones			
<p>No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PT</i>, pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
2	<p>Elizabeth Torres Deloya</p> <p>Denunció al <i>PT</i>, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como <i>CAE</i>.</p>	<p>Afiliada 21/02/2011</p> <p>Registro cancelado 05/02/2021</p>	<p>Informó que fue afiliada el 21/02/2011 y que fue dado de baja 29/01/2021.</p> <p>No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.</p>
Conclusiones			
<p>No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PT</i>, pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
3	<p>Liliana Flores Saldaña</p> <p>Denunció al <i>PT</i>, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que no firmó para ser militante del partido.</p>	<p>Afiliada 15/04/2008</p> <p>Registro cancelado 29/01/2021</p>	<p>Informó que fue afiliada el 21/12/2007 y que fue dada de baja 29/01/2021.</p> <p>No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.</p>
Conclusiones			
<p>No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i>, pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
4	<p>Edgar Fernando Roa Rodríguez</p>	<p>Afiliado 12/11/2019</p>	<p>Informó que fue afiliado el 12/11/2019 y que fue dado de baja 29/01/2021.</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que su madre trabaja en el CENDI donde le pidieron afiliarse, y señala que desconocía en qué consistía la afiliación y su duración.	Registro cancelado 29/01/2021	No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
5	María Elena del Refugio Martínez Flores Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que al hacer su inscripción para participar en el proceso de selección del INE, no se pudo inscribir por parecer en el <i>PT</i> .	Afiliada 12/06/2012 Registro cancelado 05/02/2021	Informó que fue afiliada el 12/06/2012 y que fue dado de baja 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
6	Gerardo Nieto Tovar	Afiliado 20/11/2012	Informó que fue afiliado el 20/11/2012 y que fue dado de baja el 29/01/2021.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que nunca ha dado su consentimiento de afiliación a ningún partido.	Registro cancelado 04/02/2021	No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar la afiliación del denunciante, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
7	Luis Fernando López Estrada Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que nunca ha dado su consentimiento de afiliación a ningún partido puesto que no ha tenido contacto con ninguno.	Afiliado 11/05/2009 Registro cancelado 04/02/2021	Informó que fue afiliado el 11/05/2009 y que fue dado de baja 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
8	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.	Afiliada 12/03/2020 Registro cancelado 04/02/2021	Informó que fue afiliada el 12/03/2020 y que fue dada de baja el 29/01/2021. Aportó, copia simple, de la documentación que acreditara la debida

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como CAE.		afiliación de la denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del PT, pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el PT no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
9	Luis Alfonso Arano Ponce Denunció al PT, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como CAE.	Afiliado 02/12/2019 Registro cancelado 04/02/2021	Informó que fue afiliado el 02/12/2019 y que fue dada de baja el 29/01/2021. Aportó, copia simple, de la documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del PT, pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el PT no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
10	Roger Ordaz de la Peña Denunció al PT, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como CAE.	Afiliado 12/12/2019 Registro cancelado 04/02/2021	Informó que fue afiliado el 12/12/2019 y que fue dada de baja el 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
11	Anadela Cano Vázquez Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como <i>CAE</i> .	Afiliada 23/12/2011 Registro cancelado 29/01/2021	Informó que fue afiliada el 01/01/2011 y que fue dada de baja el 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
12	César Estrada Pérez Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al solicitar empleo para el <i>INE</i> .	Afiliado 15/10/2011 Registro cancelado 29/01/2021	Informó que fue afiliado el 01/01/2011 y que fue dada de baja el 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
13	<p style="text-align: center;">María de la Luz Fabro Fuentes</p> <p>Denunció al <i>PT</i>, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como <i>CAE</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Afiliado 08/12/2019</p> <p style="text-align: center;">Registro cancelado 04/02/2021</p>	<p>Informó que fue afiliado el 08/12/2019 y que fue dada de baja el 29/01/2021.</p> <p>No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.</p>

Conclusiones

No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del *PT*, pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el *PT* no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que **se trata de una afiliación indebida.**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
14	<p style="text-align: center;">Nallely Rubí de León Montellano</p> <p>Denunció al <i>PT</i>, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al postularse para participar como <i>CAE</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Afiliado 14/11/2013</p> <p style="text-align: center;">Registro cancelado 04/02/2021</p>	<p>Informó que fue afiliada el 14/11/2013 y que fue dada de baja el 29/01/2021.</p> <p>No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.</p>

Conclusiones

No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del *PT*, pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el *PT* no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que **se trata de una afiliación indebida.**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
15	Luis Arturo Hernández Melgoza	Afiliado 15/11/2019	Informó que fue afiliado el 15/11/2019 y que fue

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que el <i>PT</i> al ofrecerle trabajo como representante de casilla, no le informó que lo afiliarían.	Registro cancelado 29/01/2021	dada de baja el 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
16	Emilio Iván Vagas Lomelí Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que nunca se ha afiliado a algún partido político por que no le interesa la relación con ellos.	Afiliado 11/01/2014 Registro cancelado 29/01/2021	Informó que fue afiliado el 15/01/2014 y que fue dada de baja el 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
17	Héctor Méndez Oseguera Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.	Afiliado 22/05/2012 Registro cancelado 29/01/2021	Informó que fue afiliado el 18/03/2017 y que fue dada de baja el 29/01/2021.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
	Refirió que desconocía la afiliación y que fue obligado a afiliarse para mantener un lugar en la guardería de dicho instituto político.		No aportó documentación que acreditara la debida afiliación del denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
18	Lucía Araceli Ramírez González Denunció al <i>PT</i> , por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que sólo ayudó en dicho partido político a entregar despensas.	Afiliado 11/12/2019 Registro cancelado 29/01/2021	Informó que fue afiliada el 11/12/2019 y que fue dada de baja el 29/01/2021. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.
Conclusiones			
No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del <i>PT</i> , pues ello fue referido por la denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que la citada ciudadana negó haber consentido ser afiliada a ese instituto político y el <i>PT</i> no aportó constancia alguna para acreditar su afiliación, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.			

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIFE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las denunciantes, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y, por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de Resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde a la parte promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra del denunciado (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las quejas para afiliarlos a su partido político, y no a éstos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que las personas denunciadas, se encontraron como afiliadas del *PT*.

Por otra parte, el *PT* debe demostrar con medios de prueba, que las afiliaciones respectivas son el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las partes denunciadas, en los cuales, ellas mismas, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Así pues, en estos casos la carga de la prueba corresponde al *PT* en tanto que el dicho de las personas denunciadas consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliadas —modalidad positiva—, o bien, que no se les separó de la militancia cuando —modalidad negativa—, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así**

garantizado para toda la ciudadanía de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro país, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de una persona para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados o afiliadas— siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**.

En suma, toda vez que las personas denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido, que está comprobada su afiliación, y que el *PT*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, **esta autoridad**

electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las partes quejas y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Lo anterior, con excepción de los casos en los que el denunciado sí demostró que la afiliación de las personas quejas se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de las veintiún denuncias respecto de las que se emite pronunciamiento de fondo en la presente determinación.

Apartado A. Persona de quien el *PT* no conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

Como se precisó en el apartado anterior, a partir de los elementos de prueba que obran en autos, se tiene que, por cuanto hace a una persona, el partido político denunciado aportó elementos de prueba —cédula de afiliación—, que se tuvo por válida y de la cual, la persona denunciante no formuló objeción alguna; las denuncias que se encuentra en tal supuesto, corresponden a las siguientes personas:

No	Persona denunciante
1	Leticia Aguilar Campos
2	Verónica Cabrera Hernández
3	Jaime Alvarado Zapata

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **las personas antes precisadas**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el *PT* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

Así las cosas, para sostener la legalidad de las afiliaciones cuestionadas el *PT*, ofreció como medio de prueba para sustentar la debida afiliación de las personas quejas, **el original de la respectiva cédula de afiliación**, acompañada con copia

de la credencial para votar de las ciudadanas y el ciudadano en cuestión, medios de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de las afiliaciones controvertidas.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho que se trata de documental privada que *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pues apreciada en su contexto y concatenada con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de las afiliaciones discutidas, ya que fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria de las personas quejasas, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que las mismas imprimieron en dichos formatos.

De este modo, esta autoridad resolutora engarzó una cadena de indicios a partir de diversos hechos que se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de la afiliación; ii) la documental privada, consistente en el original del formato de afiliación de la persona antes precisada, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad de la quejosa (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción o falta de objeción eficaz de ese formato.

En este tenor, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y el derecho de audiencia de las personas denunciantes, la autoridad instructora, en cumplimiento a lo establecido en el *Manual*, dio vista a estas a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con la cédula de afiliación que aportó el *PT*, conforme a lo siguiente:

*Mediante Acuerdo identificado con la clave **INE/CG189/2020**, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el **Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el Proceso Electoral 2020-2021**, que en su **Anexo 5** denominado **Procedimiento para la Compulsa de la credencial de elector**, señala, en lo conducente lo siguiente:*

En caso de que las diligencias de investigación se desprendan que el partido político correspondiente aportó documentos que acrediten la afiliación, la UTCE avisará a la o el aspirante afectado para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en un plazo de 3 días.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

*Por lo anterior, y toda vez que el Partido Revolucionario Institucional proporcionó documentación relacionada con la afiliación de las siguientes personas denunciadas, se ordena dar vista a éstas, con copia simple de los respectivos documentos, a efecto de que, dentro del plazo improrrogable de **tres días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente al de la legal notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto de los citados documentos.*

[Se insertan nombres]

Al respecto, es menester precisar que las manifestaciones u objeciones que, en su caso, formule respecto de la información con la cual se les corre traslado, deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 24, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual, para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

Artículo 24 *[Se transcribe]*

Tales diligencias fueron desahogadas como ya ha quedado reseñado con antelación.

Sin que sea óbice señalar que, en la etapa de alegatos, el expediente citado al rubro se puso a disposición de las partes denunciadas, en cuyas constancias se encuentran los documentos base del partido político; lo anterior, a fin de que, en dicha etapa procesal, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Sin embargo, las personas quejasas fueron omisas en responder tanto a la vista que les fue formulada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en la que se les corrió traslado con el formato de afiliación, así como para formular alegatos; por lo que hicieron nulo su derecho de realizar las manifestaciones que estimaran pertinentes y, en su caso, de desvirtuar el medio de prueba exhibido.

En efecto, de lo antes referido es posible advertir de las constancias de autos que, aun cuando las personas denunciadas tuvieron la oportunidad procesal de objetar la autenticidad y contenido de la respectiva cédula de afiliación, se abstuvieron de cuestionarlas, pues no se apersonaron al procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido, de lo que se puede colegir que existe un reconocimiento tácito de estas de haber suscrito y firmado ese documento, lo que de suyo permite colegir que existió su voluntad para ser afiliadas al partido denunciado.

En este sentido, se debe precisar que el derecho de contradicción probatoria no es más que la posibilidad de las partes de defenderse, de refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, y de ser el caso, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra.

No obstante, la oportunidad procesal que tuvo Leticia Aguilar Campos, Verónica Cabrera Hernández y Jaime Alvarado Zapata de refutar el documento que, para caso caso, aportó el *PT* para acreditar que sí medió la voluntad libre y expresa de estas de querer pertenecer a las filas de militantes de dicho ente político, lo cierto es que las citadas personas denunciantes no hicieron valer ese derecho de contradicción dentro del procedimiento.

Por tanto, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de estas personas, haya sido producto de una acción ilegal por parte del *PT*, pues como se refirió, el formato original de afiliación aportado por el denunciado, no fue controvertido u objetado de manera frontal y directa por parte de las personas denunciantes, no obstante que estuvieron en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho.

Así las cosas, este órgano considera que el partido político sí cumplió con la carga probatoria que le correspondía a su afirmación, en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las personas quejosas; es decir, acreditó con los medios de prueba idóneos, necesarios y suficientes, que sí existió la voluntad de estas de incorporarse como militantes de ese partido político y, que para ello, suscribieron y firmaron el respectivo formato de afiliación que, a la postre, aportó el *PT*, por lo que, es válido colegir que dicho denunciado sí realizó la afiliación de las personas promoventes de conformidad con sus procedimientos internos.

Lo anterior, ya que dicho elemento (firma autógrafa) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad de la persona de accionar el sistema de impartición de justicia y vincula a su autor con el acto jurídico contenido en el documento, traduciéndose en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, el cual, se reitera, no fue materia de objeción.

Por tanto, la conclusión a la que se llega es que, el *PT* sí acreditó con los medios de prueba idóneos, necesarios y suficientes, que sí existió la voluntad de las partes quejasas de incorporarse como militantes de ese partido político, y para ello suscribieron y firmaron el formato de afiliación que, al efecto, aportó el partido; por tanto, el denunciado sí realizó la afiliación de estas de conformidad con sus procedimientos internos.

Por todo lo anterior, y a partir de los razonamientos establecidos en los apartados previos, esta autoridad considera que la afiliación de las **tres personas denunciantes** al *PT* fue apegada a derecho, por lo que, puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable, resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normativa electoral que le fueron imputados.

Así, la cadena de indicios mencionada no resultó fragmentada, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Pues como se ha manifestado, si el partido político cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las partes quejasas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de denuncia, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En conclusión, a partir de los razonamientos previamente establecidos, esta autoridad considera que las afiliaciones de dichas personas fueron apegadas a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normativa electoral que le fueron imputados.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la *LGPP* en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación de esta persona al *PT*, sino también la ausencia de voluntad de la misma para ser afiliada, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que si en la especie solamente se justificó la afiliación de la parte denunciante sin evidenciar la ausencia de voluntad de la misma en ese acto, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *LGPP*, ya que al concluirse que las persona quejosa se afilió libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PT* no utilizó indebidamente la información y datos personales de la impetrante, porque estas, en su oportunidad, consintió afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente resolución, era menester proporcionar al partido político esa información y los documentos atinentes.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PT* sanción alguna.

Similar consideración estableció el Consejo General, entre otras, en las determinaciones INE/CG321/2020 e INE/CG1670/2021, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte y diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves UT/SCG/Q/JJUV/JD01/AGS/300/2018 y UT/SCG/Q/MCRB/JD04/QROO/171/2020, respectivamente.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que, en el caso de **Jaime Alvarado Zapata** existe discrepancia entre la fecha de afiliación reportada por la *DEPPP* y la señalada en el formato de afiliación aportado por el *PT*, como se advierte a continuación:

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada por la DEPPP [La cual es coincidente con la señalada por el PT]	Fecha del Formato de Afiliación aportado por el PT
Jaime Alvarado Zapata	10/10/2013	2012

No obstante, aun cuando existe inconsistencia entre la fecha registrada en el formato de afiliación aportado por el *PT* y la señalada por la *DEPPP*, lo cierto es que para la fecha en que el partido político dio de alta como militante al quejoso, este ya había consentido integrarse a sus filas, conforme a las constancias que obran en autos y que, como se indicó, no fue controvertida.

Esto es, aun cuando en el formato cuestionado aparece una fecha distinta a aquella en que se realizó el registro denunciado, ello no destruye la eficacia demostrativa de dicha cédula, pues, por un lado, el denunciado puntualizó la fecha en que se llevó a cabo el registro de la afiliación controvertida, fecha coincidente con lo informado por la *DEPPP*; y por otro, la fecha estampada en el formato respectivo, es anterior a la fecha en que la persona denunciante fue registrada como militante del *PT*.

En efecto, aun en el caso que la afiliación de la persona quejosa hubiese sucedido en la fecha estampada en la cédula de afiliación (2012) lo cierto es que, al diez de octubre de dos mil trece, la persona denunciante ya había manifestado su consentimiento para ser registrado como militantes del *PT*, de manera que la discrepancia en las fechas, en modo alguno anula su libre consentimiento para ser incorporado al padrón de militantes del denunciado, especialmente cuando el formato respectivo no fue objetado.

Criterio similar, adoptó este *Consejo General* en la resolución **INE/CG1656/2021**,⁹⁴ dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/JRM/CG/74/2020.

⁹⁴ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125691/CGor202111-17-rp-3-3.pdf>

Ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el *PT* aportó medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar que la afiliación de los quejosos fue libre y voluntaria, sin que éstos desvirtuaran su autenticidad y contenido, se debe concluir que las afiliaciones de los denunciados se realizaron conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables, por tanto, no se acredita la infracción que se analiza.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes:

DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en Principio, las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. Sin embargo, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.** Lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

Es por ello que, **se tiene por no acreditada la infracción** en el procedimiento sancionador ordinario, consistente en la supuesta violación al derecho político de libre afiliación de **tres personas denunciadas**, cuyo caso se analizó en el presente apartado, por los argumentos antes expuestos.

Ahora bien, más allá de que se tiene por no acreditada la infracción imputada al *PT*, es importante precisar que las personas quejasas, en su oportunidad, fueron dadas de baja del padrón de afiliados de partido político denunciado, como se advierte de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora.

Apartado B. Personas de quienes el *PT* conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

Ahora bien, como también quedó establecido desde el apartado en el que se analizaron los elementos de prueba, en dieciocho de los casos, el *PT* reconoció la afiliación de las personas denunciantes, sin aportar elemento de prueba del que se pueda desprender que las personas denunciantes otorgaron su autorización para ser incorporadas al padrón de afiliados.

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Norma Mirella Corrales Félix	30/06/2008
2	Elizabeth Torres Deloya	21/02/2011
3	Liliana Flores Saldaña	15/04/2008
4	Edgar Fernando Roa Rodríguez	12/11/2019
5	María Elena del Refugio Martínez Flores	12/06/2012
6	Gerardo Nieto Tovar	20/11/2012
7	Luis Fernando López Estrada	11/05/2009
8	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez	12/03/2020
9	Luis Alfonso Arano Ponce	02/12/2019
10	Roger Ordaz de la Peña	12/12/2019
11	Anadela Cano Vázquez	23/12/2011
12	María de la Luz Fabro Fuentes	08/12/2019
13	Nallely Rubí de León Montellano	14/11/2013
14	Luis Arturo Hernández Melgoza	15/11/2019
15	Lucía Araceli Ramírez González	11/12/2019
16	Emilio Iván Vargas Lomelí	11/01/2014
17	Héctor Méndez Oseguera	22/05/2012
18	César Estrada Pérez	15/10/2011

Como se precisó con anterioridad, no existe controversia acerca de que tales personas fueron registradas, en algún momento, como afiliados del *PT*; ello, pues así lo denunciaron las quejas y el quejoso, y fue corroborado por la *DEPPP* y reconocido por el denunciado.

Del mismo modo, se han establecido los fundamentos y razones a partir de los cuales se considera que el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de las partes quejas **es el formato original de afiliación** o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del *PT* en materia de afiliación, en la que constara el deseo de las personas de querer afiliarse a ese

partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma, domicilio y datos de identificación.

Al respecto, es importante destacar, en lo que interesa, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, al resolver el medio de impugnación con clave SUP-RAP 141/2018:⁹⁵

*...si los ciudadanos referidos alegaron que no dieron su consentimiento para pertenecer al partido político recurrente, implícitamente sostienen que no existe la constancia de afiliación atinente; por tanto, los ciudadanos no estaban obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.*⁹⁶

Esto es, en el tema que nos ocupa, conforme a lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018, la carga probatoria corresponde a los partidos políticos, en el caso al *PRI*, ente político que se encuentra obligado a demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad o, en su caso, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios de prueba como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de dichas personas en la vida interna del partido y con carácter de militante, como lo serían, por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.⁹⁷

En esta línea argumentativa, debe recalcar el hecho de que los partidos políticos son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral.

En consecuencia, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento,

⁹⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0141-2018.pdf

⁹⁶ De conformidad con los numerales 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley de Medios

⁹⁷ Criterio sostenido en la sentencia dictada en el medio de impugnación SUP-RAP 141/2018.

que las afiliaciones que realizan, deben ser de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, **conservar y resguardar** y, en su caso, **exhibir** la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Por tanto, tales entes se encuentran compelidos a acreditar con las pruebas idóneas que las afiliaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales y estatutarias, pues precisamente corresponde al oferente y más, tratándose de una institución política, acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal.

Entonces, si en el caso concreto, se tiene que, respecto de **los dieciocho ciudadanos y ciudadanas enlistadas**, el *PT* no aportó la cédula ni documento alguno para acreditar que el registro de tales personas denunciantes aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, el instituto político utilizó sin autorización sus datos personales.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que por lo que respecta a **Marlet del Carmen Aguilar Jiménez y Luis Alfonso Arano Ponce**, el *PT* presentó los formatos de afiliación respectivos en **copia simple**, por lo que no pueden generar convicción en este órgano colegiado sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, además de que tampoco se encuentran robustecidos ni adminiculados con algún otro medio de prueba que obre en autos para otorgarles eficacia demostrativa.

En efecto, esta autoridad electoral considera que, al tratarse de medios de prueba que fueron ofrecidos en copia simple, además de que resultan insuficientes, no

pueden producir eficacia demostrativa para anular la culpabilidad del denunciado porque por sí solos no rompen la fuerza incriminatoria del material probatorio que obra en autos.

Al respecto, cabe destacar que nuestro máximo Tribunal⁹⁸ ha establecido que las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio **aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad**, sin embargo, puede otorgársele valor indiciario cuando se encuentren robustecidas o adminiculadas con otro medio de prueba, circunstancia ésta última que no acontece en el caso concreto, al no estar, dichas pruebas, adminiculadas o robustecidas con medio de prueba diverso, por lo que, se reitera, no pueden producir eficacia alguna en el presente asunto.

A similar conclusión arribó este Consejo General en las resoluciones INE/CG1205/2018,⁹⁹ e INE/CG182/2021,¹⁰⁰ de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictadas en los procedimientos ordinarios sancionadores identificados con las claves UT/SCG/Q/SLNR/JL/PUE/82/2018 y UT/SCG/Q/LRA/JD04/COAH/23/2020, respectivamente.

Por otra parte, por lo que respecta a **César Estrada Pérez, Emilio Iván Vargas Lomelí y Héctor Méndez Oseguera** debe precisarse que el *PT*, a través del oficio REP-PT-INE-SGU-229/2022, remitió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, lo que dijo se trataban de formatos originales de afiliación de estas personas.

No obstante, dichas probanzas, a juicio de este órgano resolutor carecen de valor probatorio, por las razones siguientes:

⁹⁸ Véase COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172557>

⁹⁹ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98234/CGor201808-23-rp-16-15.pdf>

¹⁰⁰ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118865/CGex20210319-rp-1-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Primeramente, porque mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, la *UTCE* requirió a dicho partido político el original de las correspondientes constancias de afiliación o, en su caso, de cualquier documentación que acreditara la voluntad de las personas quejasas de querer afiliarse al *PT*, siendo omiso en atender la solicitud de la referida autoridad instructora; lo anterior, en el marco de la investigación desplegada por la autoridad sustanciadora para allegarse de elementos que permitiesen conocer la verdad de los hechos denunciados.

Posteriormente, mediante proveído de dos de mayo de la presente anualidad, la *UTCE* emplazó al *PT*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a los hechos que le fueron imputados y **aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.**

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PT</i> INE-UT/04168/2022	Citatorio: 04 de mayo 2022. Cédula: 06 de mayo de 2022. Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta

Esto es, el plazo concedido al *PT* para dar respuesta al emplazamiento y aportar los medios de prueba que considerara pertinentes, transcurrió del nueve al trece de mayo de este año, sin que haya dado respuesta ni aportado medio de prueba alguno.

Al respecto resulta pertinente destacar que se apercibió al denunciado que, en caso de no contestar el emplazamiento respectivo, **se tendría por precluido su derecho a ofrecer pruebas,** de conformidad con lo establecido en el artículo 467, párrafos 1 y 2, de la *LGPE*.

En este sentido, los originales de la cédulas y formatos de afiliación respectivos, debían haber sido ofrecidos de la siguiente manera:

- Al desahogar el requerimiento de información que se le formuló mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

- En cualquier momento previo al emplazamiento.
- Al contestar el emplazamiento formulado por acuerdo de dos de mayo de la presente anualidad.

En el presente caso, el *PT* presentó el **uno de junio de dos mil veintidós**, las cédulas de afiliación originales de **César Estrada Pérez, Emilio Iván Vargas Lomelí y Héctor Méndez Oseguera**, eso es, el partido denunciado exhibió esos documentos después del plazo que legalmente tenía para hacerlo, es decir, **posterior al emplazamiento** que se le formuló por la autoridad instructora, por lo tanto, es dable concluir que se trata de pruebas presentadas extemporáneamente, por lo que las mismas no pueden ser admitidas y valoradas en la presente Resolución.

En efecto, el derecho de prueba que tienen las partes del presente procedimiento para acreditar sus pretensiones, se encuentra limitado en cuanto a su temporalidad por el artículo 467, párrafos 1 y 2, de la *LGIPE*, el cual debe materializarse al momento de dar contestación al emplazamiento, ofreciendo y aportando las pruebas con las que cuente y relacionando estas con los hechos que se le imputan o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por encontrarse en poder de una autoridad y que no le fue posible obtener.

En efecto, los derechos de las partes en el procedimiento sancionador administrativo a que se les reciban pruebas para acreditar sus pretensiones, se encuentran limitados por la forma y términos que establece el artículo 467, párrafo 2, de la *LGIPE*, es decir, al momento de dar contestación al emplazamiento deberán ofrecer y aportar las pruebas con las que cuente, debiendo relacionar estas con los hechos que se le imputan o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por encontrarse en poder de una autoridad y que no le fue posible obtener.

En tal virtud, si una vez que se dio respuesta al emplazamiento de ley y no se ofrecieron las pruebas pertinentes, las que se propongan fuera del término que se establece para la exhibición de dichos elementos de convicción, debe negarse su admisión.

En este sentido, esta autoridad no debe suplir la omisión en que incurrió el denunciado al dejar de acompañar los documentos base de su pretensión a su escrito de contestación, porque de hacerlo incurriría en contravención al **principio de igualdad procesal de las partes**.

Por tanto, es que se considera que no deben de admitirse sin motivo legal justificado documentos aportados extemporáneamente al no acompañarse al escrito de contestación de emplazamiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ***PRUEBAS DOCUMENTALES. MOMENTO PROCESAL PARA SU OFRECIMIENTO***.

Lo anterior se estima así, porque la razón que subyace en la propia norma para el establecimiento de las distintas etapas procesales atiende a la observancia del principio de definitividad en las fases en que se compone el procedimiento sancionador, el cual dota de un equilibrio entre las partes a fin de que éstas en las correspondientes etapas en que se divide el proceso, puedan defenderse sin la posibilidad de que este se postergue de forma indefinida e innecesaria en perjuicio de la expedites en el dictado de las resoluciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.

Precisado lo anterior, como se adelantó, el partido político denunciado no aportó las documentales idóneas para acreditar la voluntad de las personas que aquí se analizan, **ello dentro del plazo que legalmente tenía para tal efecto**.

Asimismo, si bien se acredita que el citado ente político tramitó la baja de los registros de las personas denunciadas, lo cierto es que, esa acción resulta insuficiente para desvirtuar la conducta denunciada, que consiste en la indebida afiliación.

Con base en ello, ante la negativa de **Norma Mirella Corrales Félix, Elizabeth Torres Deloya, Liliana Flores Saldaña, Edgar Fernando Roa Rodríguez, María Elena del Refugio Martínez Flores, Gerardo Nieto Tovar, Luis Fernando López Estrada, Marlet del Carmen Aguilera Jiménez, Luis Alfonso Arano Ponce, Roger Ordaz de la Peña, Andela Cano Vázquez, César Estrada Pérez, María de**

la Luz Fabro Fuentes, Nallely Rubí de León Montellano, Luis Arturo Hernández Melgoza, Emilio Iván Vargas Lomelí, Héctor Méndez Oseguera y Lucía Araceli Ramírez González, de haberse afiliado voluntariamente al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo, pues no comprobó de manera objetiva que dichas afiliaciones se realizaron al amparo de la ley.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, las afiliaciones al *PT* implican, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a las personas denunciadas ya precisadas.

Por otra parte, es dable afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de los quejosos, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

En ese sentido, es válido concluir que el *PT* no demostró que la afiliación de las personas denunciadas, cuyo caso se analiza en este apartado, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que aquella haya dado su consentimiento libre para ser afiliada.

Lo anterior, en virtud de que la normativa interna del partido, establece lo siguiente:

- El artículo 22, refiere que los documentos que deberá presentar la o el ciudadano para poder afiliarse al *PT* son, presentar una solicitud de afiliación por escrito.

Con base en lo anterior, es claro que el *PT* establece ciertos requisitos específicos de afiliación para acreditar la manifestación libre, voluntaria y previa de las personas, de entre las que destacan, la suscripción de solicitud de afiliación por escrito; lo anterior, a fin de dotar de certeza respecto de la voluntad libre y sin presión de quienes deseen ser inscritos; requisitos mismos que, en el caso que se analiza no fueron cumplidos por el denunciado, tal y como lo establece su propia legislación interna.

En efecto, el *PT* no aportó las cédulas correspondientes a **los dieciocho ciudadanos y ciudadanas, motivo de estudio en el presente apartado**, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de las personas quejasas aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normatividad interna.

En mérito de todo lo anterior, existe evidencia que hace establecer que las afiliaciones analizadas en el presente apartado, fueron producto de una acción ilegal por parte del *PT*.

En conclusión, este órgano colegiado tiene **por acreditada la infracción** en el presente procedimiento, pues se concluye que el *PT* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de las **personas denunciantes** antes precisadas, quienes aparecieron como afiliadas a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de éste para ser agremiado a ese partido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, antes referida.

En tal virtud, como se demostró anteriormente, las partes denunciantes que aparecieron afiliadas al *PT*, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el *PT* no demostró que la afiliación de las **dieciocho personas**, cuyo caso se analiza en este apartado, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que éstas hayan dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de las partes actoras de haberse afiliado al *PT*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de las personas, lo que no hizo, siendo

que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que las personas denunciadas aparezcan como afiliadas o afiliados al *PT* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas y dentro de los plazos legales, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de las personas en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PT* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a las ahora partes denunciadas.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación del y las quejas, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de las personas inconformes para mantener, solicitar y/o adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar con certeza respecto a que la afiliación fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por éstas al desconocer su registro o incorporación al propio partido político.

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con padrones de militantes de personas que libre y voluntariamente hayan decidido pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria,

además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el padrón en depuración y actualización constante.

Es de destacar que la Resolución INE/CG53/2017, fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-107/2017**, donde se consideró que ***conforme a las reglas de carga de la prueba, el partido político denunciado debía justificar que la quejosa fue afiliada voluntariamente, de manera que la prueba idónea que podía aportar al procedimiento para demostrar su hipótesis de inocencia, era precisamente la constancia de afiliación de la ciudadana, sin que así lo hubiera hecho.***

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, **se tiene por acreditada la infracción** en el presente procedimiento en contra del *PT*, por la violación al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—, respecto de **Norma Mirella Corrales Félix, Elizabeth Torres Deloya, Liliana Flores Saldaña, Edgar Fernando Roa Rodríguez, María Elena del Refugio Martínez Flores, Gerardo Nieto Tovar, Luis Fernando López Estrada, Marlet del Carmen Aguilera Jiménez, Luis Alfonso Arano Ponce, Roger Ordaz de la Peña, Andela Cano Vázquez, César Estrada Pérez, María de la Luz Fabro Fuentes, Nallely Rubí de León Montellano, Luis Arturo Hernández Melgoza, Emilio Iván Vargas Lomelí, Héctor Méndez Oseguera y Lucía Araceli Ramírez González**, en consecuencia, lo conducente es establecer la sanción correspondiente.

SEXTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PT*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se

deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PT</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida (modalidad positiva) de dieciocho personas , así como el uso no autorizado de los datos personales de estos.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las personas de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PT* **incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a dieciocho personas**, sin demostrar que para incorporarles medió la voluntad de éstos de inscribirse a dicho padrón, violentando con ello lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, para las indebidas afiliaciones acreditadas, se usaron los datos personales de las partes promoventes, sin que éstas hubiesen otorgado su consentimiento para ello.

Lo anterior, ya que, lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector para ser afiliada, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de estos datos se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los denunciados al padrón de militantes del *PT*.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al denunciado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el presente caso se trata de una falta **singular**.

Ello, toda vez que, aun cuando se acreditó que el *PT* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los

derechos de más de **veinte personas**, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación en su vertiente positiva al instituto político denunciado, quien incluyó y mantuvo en su padrón de militantes a cuatro personas denunciantes, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PT*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **dieciocho personas**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstas de pertenecer a las filas del instituto político en el cual encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.
- b) Tiempo y lugar.** En el caso concreto, la afiliación sin el consentimiento previo de las personas quejasas, aconteció en las fechas y lugares que se citan en el cuadro siguiente:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Entidad
1	Norma Mirella Corrales Félix	30/06/2018	Sinaloa
2	Elizabeth Torres Deloya	21/02/2011	Guerrero
3	Liliana Flores Saldaña	15/04/2008	Baja California
4	Edgar Fernando Roa Rodríguez	12/11/2019	Michoacán
5	María Elena del Refugio Martínez Flores	12/06/2012	Guanajuato
6	Gerardo Nieto Tovar	20/11/2012	San Luis Potosí

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Entidad
7	Luis Fernando López Estrada	11/05/2009	San Luis Potosí
8	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez	12/03/2020	Quintana Roo
9	Luis Alfonso Arano Ponce	02/12/2019	Quintana Roo
10	Roger Ordaz de la Peña	12/12/2019	Quintana Roo
11	Anadela Cano Vázquez	23/12/2011	Veracruz
12	César Estrada Pérez	15/10/2011	Michoacán
13	María de la Luz Fabro Fuentes	08/12/2019	Quintana Roo
14	Nallely Rubí de León Montellano	14/11/2013	Zacatecas
15	Luis Arturo Hernández Melgoza	15/11/2019	Michoacán
16	Emilio Iván Vargas Lomelí	11/01/2014	Michoacán
17	Héctor Méndez Oseguera	22/05/2012	Michoacán
18	Lucía Araceli Ramírez González	11/12/2019	Michoacán

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PT*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*, replicados en los dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PT* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PT* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado

democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, incisos a), de la *LGPP*.

- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana y ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 3, párrafo 2, y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Las personas quejasas aluden, que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PT*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que las partes denunciantes aparecieron en el padrón de militantes del *PT*, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien además precisó que dicha información deriva del padrón de militantes capturado por ese instituto político.
- 3) El partido político denunciado no aportó pruebas con las que demostrara que las afiliaciones de las **veinte personas** denunciantes antes identificadas se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que las afiliaciones de las **veinte personas** quejasas fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado

de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que las afiliaciones de los denunciados fueron debidas y apegadas a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PT*, se cometió al afiliar indebidamente a **dieciocho personas**, sin demostrar el acto volitivo de éstas de ingresar en su padrón de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PT*, esta autoridad considera que, en el caso concreto, **sí se actualiza**, respecto de la afiliación de **Edgar Fernando Roa Rodríguez, Marlet del Carmen Aguilera Jiménez, Luis Alfonso Arano Ponce, Roger Ordaz de la Peña, María de la Luz Fabro Fuentes, Luis Arturo Hernández Melgoza y Lucía Araceli Ramírez González.**

Lo anterior se afirma así, puesto que, de conformidad con el artículo 355, párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del

incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹⁰¹

En este sentido, por cuanto hace a indebidas afiliaciones atribuidas al *PT*, esta autoridad tiene presente la existencia de diversas resoluciones emitidas por el *Consejo General*, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado, la identificada con la clave **INE/CG273/2018**¹⁰², aprobada por el *Consejo General* de este Instituto, el **veintiocho de marzo de dos mil dieciocho**, en el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave **UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017**, misma que no fue impugnada, y por tanto, es definitiva y firme.

Con base en ello, respecto de las afiliaciones indebidas que han sido demostradas en el presente procedimiento, por cuanto hace a las personas denunciadas **Norma Mirella Corrales Félix, Elizabeth Torres Deloya, Liliana Flores Saldaña, María del Refugio Martínez Flores, Gerardo Nieto Tovar, Luis Fernando López**

¹⁰¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

¹⁰² <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95595/CGord201803-28-rp-6-3.pdf>

Estrada, Anadela Cano Vázquez, César Estrada Pérez, Nallely Rubí de León Montellano, Emilio Iván Vargas Lomelí y Héctor Méndez Oseguera , se estima que, **no existe reincidencia**, ya que se trata de afiliaciones realizadas entre **abril de dos mil ocho y enero de dos mil catorce**, esto es, con anterioridad a la fecha en que se emitió la resolución que se ha tenido como base para determinar, en el caso concreto, la existencia o no, de reincidencia, esto es, el **veintiocho de marzo de dos mil dieciocho**; de ahí que no exista reincidencia en esos casos.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de **dieciocho personas** denunciantes al partido político, pues se comprobó que el *PT* las afilió sin demostrar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de éstas de pertenecer a la lista de militantes de dicho instituto político.

- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las **dieciocho** personas denunciadas, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PT*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Sí existe reincidencia por parte del *PT*, respecto de siete personas denunciadas.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PT* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación— de **dieciocho personas**, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en los artículos 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; y con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON**

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación, conducta que se ha acreditado en el caso, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada.**

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PT*, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los diversos precedentes, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos **cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.**

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental de la ciudadanía a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, se establecieron plazos específicos para que los partidos políticos cumplieran su obligación de tener padrones de militantes debidamente integrados.

Siendo que en la etapa de Consolidación de Padrones se establecieron las siguientes obligaciones:

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

Destacándose que en términos del acuerdo **INE/CG33/2019**, esta etapa ratificación concluiría a más tardar al **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas quejas de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos, podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, es importante tomar en cuenta que, para **todos los casos** existen circunstancias particulares de las que se puede concluir, no se ubican en la hipótesis anterior.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de afiliados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PT* por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato

constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.¹⁰³ *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.*

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por el PT, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGPE*, toda vez que dicha actitud redundaría en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

103

Consultable

en

la

página

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, la baja de las personas denunciadas del padrón de militantes del partido denunciado aconteció en las fechas que enseguida se precisan:

No.	Persona denunciante	Fecha de baja
1	Norma Mirella Corrales Félix	29/01/2021
2	Elizabeth Torres Deloya	29/01/2021
3	Liliana Flores Saldaña	29/01/2021
4	Edgar Fernando Roa Rodríguez	29/01/2021
5	María Elena del Refugio Martínez Flores	29/01/2021
6	Gerardo Nieto Tovar	29/01/2021
7	Luis Fernando López Estrada	29/01/2021
8	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez	29/01/2021
9	Luis Alfonso Arano Ponce	29/01/2021
10	Roger Ordaz de la Peña	29/01/2021
11	Anadela Cano Vázquez	29/01/2021
12	César Estrada Pérez	29/01/2021
13	María de la Luz Fabro Fuentes	29/01/2021
14	Nallely Rubí de León Montellano	29/01/2021
15	Luis Arturo Hernández Melgoza	29/01/2021
16	Emilio Iván Vargas Lomelí	29/01/2021
17	Héctor Méndez Oseguera	29/01/2021
18	Lucía Aracelí Ramírez González	29/01/2021

Como se evidencia, las fechas en que el registro de tales personas fueron cancelados del padrón del *PT*, corresponde al mes de **enero de dos mil veintiuno**, esto es, a una temporalidad en la que ya no le resultan aplicables los beneficios del acuerdo **INE/CG33/2019** al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, en ese momento ya había concluido la etapa de **Consolidación de padrones**,¹⁰⁴ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

Esto es, no obstante que, en esa temporalidad el *PT* tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al acuerdo **INE/CG33/2019**, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil,

¹⁰⁴ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

lo cierto es que dicho instituto político realizó la baja hasta ser requerido por la UTCE, sin que se aprecie que se hubiere realizado una genuina revisión de los registros de militantes por dicho partido político.

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte del *PT* que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte del *PT*, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al ***PT se justifica*** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo,

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, debe tomarse en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de las personas denunciadas, estuvo rodeada de circunstancias particulares, como lo fue:

- El hecho de que el partido denunciado las siguiera conservando dentro de su padrón de militantes no obstante de haber transcurrido el periodo establecido para su depuración de registros de aquellas personas de las que no se tuviera cédula de afiliación, esto es con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte;
- Las afiliaciones fueron realizadas en dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil diecinueve y dos mil veinte
- Se concluyó la existencia del dolo, y
- **Que el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes, así como que la conducta es reincidente, respecto de un caso.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer una **multa** equivalente a **963 (novecientos sesenta y tres)** días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, **por lo que respecta a Norma Mirella Corrales Félix, Elizabeth Torres Deloya, Liliana Flores Saldaña, María del Refugio Martínez Flores, Gerardo Nieto Tovar, Luis Fernando López Estrada, Anadela Cano Vázquez, César Estrada Pérez, Nallely Rubí de León Montellano, Emilio Iván Vargas Lomelí y Héctor Méndez Oseguera.**

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Cabe precisar que, respecto de esta última, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

Asimismo, se estima pertinente imponer una multa de **1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización** vigentes al momento de la comisión de la conducta, respecto de **Edgar Fernando Roa Rodríguez, Marlet del Carmen Aguilera Jiménez, Luis Alfonso Arano Ponce, Roger Ordaz de la Peña, María de la Luz Fabro Fuentes, Luis Arturo Hernández Melgoza y Lucía Araceli Ramírez González**.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con las claves **INE/CG168/2021** e **INE/CG1674/2021**, ya citadas con antelación.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la

graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹⁰⁵ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

En este tenor, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGIPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

¹⁰⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

PT		
Personas denunciantes	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación de 2008		
2	\$52.59	\$101,287.58
Afiliación de 2009		
1	\$54.80	\$52,771.50
Afiliación de 2011		
3	\$59.82	\$ 172,817.34
Afiliación de 2012		
3	\$62.33	\$180,068.76
Afiliación de 2013		
1	\$64.76	\$62,363.30
Afiliación de 2014		
1	\$67.29	\$64,800.15
Afiliación en 2019		
6	\$84.49	\$650,910.96
Afiliación en 2020		
1	\$86.88	\$111,553.92
TOTAL		\$1,396,573.51

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, para el caso la afiliación realizada antes de dos mil dieciséis, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (963 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por su valor en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés a \$103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.); resultando las siguientes cantidades:

Persona denunciante	Año de afiliación	Multa impuesta en SMGV	Valor SMGV	Valor UMA vigente	Sanción en UMAS (A*B)/C	SANCIÓN A IMPONER (C*D*No. de personas denunciantes)
		A	B	C	D	
1	2008	963	\$52.59	\$103.74	\$488.18	\$50,643.79
2	2008	963	\$52.59	\$103.74	\$488.18	\$50,643.79
3	2009	963	\$54.80	\$103.74	\$508.69	\$52,771.50
4	2011	963	\$59.82	\$103.74	\$555.29	\$57,605.78

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021**

5	2011	963	\$59.82	\$103.74	\$555.29	\$57,605.78
6	2011	963	\$59.82	\$103.74	\$555.29	\$57,605.78
7	2012	963	\$62.33	\$103.74	\$578.59	\$60,022.92
8	2012	963	\$62.33	\$103.74	\$578.59	\$60,022.92
9	2012	963	\$62.33	\$103.74	\$578.59	\$60,022.92
10	2013	963	\$64.76	\$103.74	\$601.15	\$62,363.30
11	2014	963	\$67.29	\$103.74	\$624.64	\$64,800.15

Finalmente, para la persona que se indica a continuación, respecto de quien se impone al partido la sanción con base en la **Unidad de Medida de Actualización vigente en 2019 y 2020** que, además, se acreditó la reincidencia para el *PT* en su afiliación, corresponde la siguiente cantidad:

Persona denunciante	Año de afiliación	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	2019	1,284	\$84.49	\$108,485.16
2	2019	1,284	\$84.49	\$108,485.16
3	2019	1,284	\$84.49	\$108,485.16
4	2019	1,284	\$84.49	\$108,485.16
5	2019	1,284	\$84.49	\$108,485.16
6	2019	1,284	\$84.49	\$108,485.16
7	2020	1,284	\$86.88	\$111,553.92

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PT*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/00208/2023**, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *PT* le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **febrero** de dos mil veintitrés, la cantidad de **\$17,163,210.13 (diecisiete millones ciento sesenta y tres mil doscientos diez pesos 13/100 M.N.)**, una vez descontado el importe de las sanciones que se le impusieron.

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación

ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, para cada persona denunciante, el porcentaje:

Monto de la sanción	% de la ministración mensual
\$1,396,573.51	8.1%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PT* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PT* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la

Sala Superior en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹⁰⁶ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, las cantidades objeto de las multas serán deducidas por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PT*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,¹⁰⁷ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario, iniciado con motivo de la denuncia presentada por **María Antonia Cadena Hernández**, por cuanto hace a la supuesta violación a su derecho político de libre afiliación, en términos de lo establecido en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

SEGUNDO. No se **acredita la infracción** consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de **las siguientes personas**, en términos de lo establecido en el Considerando **QUINTO, numeral 5, Apartado A**, de esta Resolución.

No Persona denunciante

¹⁰⁶ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

¹⁰⁷ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL", y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL."

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

1	Leticia Aguilar Campos
2	Verónica Cabrera Hernández
3	Jaime Alvarado Zapata

TERCERO. Se acredita la infracción consistente en la violación al derecho de libre afiliación en su vertiente **positiva** —indebida afiliación— y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de las siguientes personas, en términos de lo establecido en el Considerando **QUINTO, numeral 5, apartado B**, de esta Resolución.

No.	Persona denunciante
1	Norma Mirella Corrales Félix
2	Elizabeth Torres Deloya
3	Liliana Flores Saldaña
4	Edgar Fernando Roa Rodríguez
5	María Elena del Refugio Martínez Flores
6	Gerardo Nieto Tovar
7	Luis Fernando López Estrada
8	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez
9	Luis Alfonso Arano Ponce
10	Roger Ordaz de la Peña
11	Anadela Cano Vázquez
12	César Estrada Pérez
13	María de la Luz Fabro Fuentes
14	Nallely Rubí de León Montellano
15	Luis Arturo Hernández Melgoza
16	Emilio Iván Vargas Lomelí
17	Héctor Méndez Oseguera
18	Lucía Araceli Ramírez González

CUARTO. En términos del Considerando **SEXTO** de la presente resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, **una multa por la indebida afiliación de cada una de las personas denunciantes respecto de quienes resulta aplicable dicha sanción**, conforme a los montos que se indican a continuación:

1	Norma Mirella Corrales Félix	488.18 (cuatrocientos ochenta y ocho punto dieciocho) Unidades de Medida y Actualización,
---	------------------------------	--

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

		calculado al segundo decimal, equivalente a \$50,643.79 (cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos 79/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2008]
2	Liliana Flores Saldaña	488.18 (cuatrocientos ochenta y ocho punto dieciocho) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$50,643.79 (cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos 79/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2008]
3	Luis Fernando López Estrada	508.69 (quinientos ocho punto sesenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$52,771.50 (cincuenta y dos mil setecientos setenta y un pesos 50/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2009]
4	Elizabeth Torres Deloya	555.29 (quinientos cincuenta y cinco punto veintinueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$57,605.78 (cincuenta y siete mil seiscientos cinco pesos 78/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]
5	Anadela Cano Vázquez	555.29 (quinientos cincuenta y cinco punto veintinueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$57,605.78 (cincuenta y siete mil seiscientos cinco pesos 78/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2011]
6	César Estrada Pérez	555.29 (quinientos cincuenta y cinco punto veintinueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$57,605.78 (cincuenta y siete mil seiscientos cinco pesos 78/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2011]
7	María Elena del Refugio Martínez Flores	578.59 (quinientos setenta y ocho punto cincuenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$60,022.92 (sesenta mil veintidós pesos 92/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2012]
8	Gerardo Nieto Tovar	578.59 (quinientos setenta y ocho punto cincuenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$60,022.92 (sesenta mil veintidós pesos 92/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

9	Héctor Méndez Oseguera	578.59 (quinientos setenta y ocho punto cincuenta y nueve) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$60,022.92 (sesenta mil veintidós pesos 92/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2012]
10	Nallely Rubí de León Montellano	601.15 (seiscientos una punto quince) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$62,363.06 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos 30/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2013]
11	Emilio Iván Vargas Lomelí	624.64 (seiscientos veinticuatro punto sesenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$64,800.15 (sesenta y cuatro mil ochocientos pesos 15/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2014]
12	Edgar Fernando Roa Rodríguez	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019]
13	Luis Alfonso Arano Ponce	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019]
14	Roger Ordaz de la Peña	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019]
15	Luis Arturo Hernández Melgoza	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019]
16	María de la Luz Fabro Fuentes	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019]

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

17	Lucía Araceli Ramírez González	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019]
18	Marlet del Carmen Aguilera Jiménez	1284 (mil doscientas ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$111,553.92 (ciento once mil quinientos cincuenta y tres pesos 92/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2020]

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al **Partido del Trabajo**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando SEXTO.

SEXTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

NOTIFÍQUESE: personalmente a las y los **denunciantes**; al **Partido del Trabajo**, por conducto de su representante ante el Consejo General de este Instituto, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y, por **estrados**, a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 27 de febrero de 2023, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MACH/JD01/TLAX/37/2021

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sobreseimiento, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**